

**A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID**

**D. Eduardo Fernández Rubiño**, diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la **PROPOSICIÓN NO DE LEY** que se acompaña, sobre medidas para abordar, para su debate ante el Pleno de la Asamblea.

Madrid, 27 de enero de 2022



Dª Mónica García Gómez  
Portavoz



D. Eduardo Fernández Rubiño  
Diputado

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos derivados no solamente de la infección por el SARS-CoV-2, sino también producidos por el impacto social derivado del drama sanitario y por las medidas implantadas para hacer frente a la pandemia. De este modo, hemos podido observar cómo en diferentes grupos de población los efectos sobre la salud derivados de medidas como el confinamiento o, en general, todas las relacionadas con el establecimiento de medidas de distanciamiento social, han podido tener un impacto incluso mayor que el de la propia COVID-19.

La población joven, especialmente los niños y niñas, padecieron el confinamiento más prolongado al no aprobarse su salida hasta finales de abril de 2020. Una vez pasada esa restricción, los cierres de los parques o el señalamiento continuo de la infancia como elemento central en las dinámicas de transmisión han sido elementos que han contribuido a alejar a la infancia y la juventud de la normalidad vivida antes de la pandemia. Desde el retorno a la educación presencial o semipresencial en septiembre de 2020, las medidas tomadas se han caracterizado por un alto nivel de incertidumbre para el profesorado y las familias, así como un importante sacrificio en términos de restricción de la socialización y uso de medidas de protección por parte del alumnado, incluso de los más pequeños.

Dentro de los efectos que se han ido observando en la infancia, la pérdida de bienestar psíquico y emocional o, llegado el caso, tras la desesperanza, la aparición de trastornos mentales más establecidos han sido los más documentados, como han mostrado estudios como el publicado por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde se señalaba la necesidad de establecer un Plan de Apoyo centrado en el ámbito educativo y en el familiar para poder afrontar este fenómeno.

El ámbito educativo es uno de los lugares donde el impacto de la COVID-19 sobre el bienestar psíquico y emocional se ha podido observar de una forma más clara. El confinamiento, acompañado de la necesidad de educación a distancia en muchos de los niveles educativos, junto con una vuelta a la presencialidad (total o parcial) en septiembre de 2020 que ha ido variando sin llegar a recobrar la normalidad a día de hoy, suponen factores que han impactado a nivel emocional en los diferentes miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias, otros trabajadores/as de los centros educativos).

Sin embargo, con anterioridad a la pandemia, organizaciones como UNICEF ya habían alertado de los problemas de salud mental en los adolescentes de nuestro país. Dos de cada diez adolescentes españoles entre 10 y 19 años padecían problemas de salud mental en 2019, el porcentaje más elevado de los 33 países europeos analizados por Unicef en su informe Estado Mundial de la Infancia 2021. La falta de oportunidades de futuro para la juventud, los cambios sociales acelerados, la desigualdad y la emergencia de nuevos fenómenos como el ciberacoso, ya venían generando el caldo de cultivo para la crisis que observamos en la actualidad.

En los últimos meses, y en consonancia con los datos publicados relativos al 2021, ha aumentado la preocupación por las cifras de suicidios e intentos de suicidio y las

autolesiones en la población joven, y se ha señalado al ámbito educativo como un lugar desde el cual poder desarrollar estrategias para tratar de abordar este problema. Este rol de los centros educativos como ámbitos de especial interés en la acción de prevención, detección y abordaje de los problemas de salud mental, se encuadra dentro de un contexto de dificultades materiales y de dotación de profesionales. La falta de recursos en los centros educativos, las altas ratios de orientador-alumnos, que llega en muchos centros de la Comunidad de Madrid a un orientador para 800 estudiantes y la aparición de nuevos problemas en una nueva realidad generada por la pandemia, han llevado a una situación de desborde para los equipos docentes, de preocupación para las familias y de desprotección para el alumnado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Más Madrid presenta ante el pleno la siguiente

### PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

1. Incorporar de forma urgente más orientadores en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid hasta lograr la equiparación a las ratios recomendadas por organismos como la UNESCO. En cualquier caso, siempre habrá un mínimo de dos orientadores por Instituto de Educación Secundaria.
2. Reforzar los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los Equipos de Atención Temprana. Priorizar entre sus funciones las de evaluación, atención psicológica o de apoyo así como de coordinación con los servicios de salud mental, atención primaria u órganos judiciales.
3. Incrementar el número de plazas en Centros Educativos Terapéuticos (CET) en la Comunidad de Madrid en al menos un 30% en el plazo de 6 meses.
4. Fomentar políticas de puertas abiertas para ampliar la participación de las familias dentro del centro en experiencias conjuntas, como espacios de convivencia, centradas en compartir y favorecer los buenos tratos, el manejo del conflicto y el estrés así como la detección precoz de síntomas de sufrimiento psíquico o desesperanza.
5. Modificar las ratios en los centros educativos de la Comunidad de Madrid a partir del curso 22/23, garantizando una reducción en el número de alumnos y alumnas en todas las etapas educativas que permita una mejor calidad de la enseñanza y un acompañamiento más individualizado.
6. Reforzar y ampliar la red de equipos multiprofesionales especializados en salud mental infanto-juvenil integrados en los Centros de Salud Mental Comunitarios y su capacidad de coordinación con los centros educativos de su área de influencia y con el resto de dispositivos sociosanitarios, con el fin de cumplir el objetivo de lograr una espera menor a 15 días en primera consulta y de 1 mes para consultas sucesivas. Estos objetivos de tiempos de espera deberán hacerse efectivos en el plazo de 3 meses desde la aprobación de esta proposición no de ley.

7. Instar al gobierno de España a realizar los cambios normativos pertinentes para el desarrollo de la figura del psicólogo educativo en el sistema educativo a lo largo de todo su recorrido.